

ORDENANZA N°/17.-

VISTO: Las diversas presentaciones y sucesivas reuniones que desde hace más de Un año se han venido realizando a los efectos de buscar soluciones a la problemática de las grandes superficies comerciales, de los negocios dedicados a la venta minorista de productos de primera necesidad y de prendas de vestir en general; Y:

CONSIDERANDO:

Que el pequeño y mediano comercio ha sido y es uno de los principales motores del crecimiento económico y el desarrollo social en la ciudad de Viale y su región. Con su diario trabajo, su aporte personal y familiar proveyendo lo necesario para la satisfacción de nuestras necesidades, la generación de empleo y demás contribuciones al quehacer local.

Que la rentabilidad del pequeño y mediano negocio se vuelca fundamentalmente en nuestra ciudad constituyendo uno de los pilares del desarrollo local.

Que a partir de la entrada en vigencia de la Ley Nacional de defensa de la competencia 25.156, de la ley de defensa del consumidor 24240, de la ley provincial 9.393 y la Ordenanza 999/08, se cuenta con todo un plexo normativo encaminado a evitar la concentración monopólica del comercio de alimentos, ante organizaciones empresariales de capital concentrado que bajo la imagen de comercios minoristas con distintos nombres o figuras pero a la sazón vinculados entre sí de algún modo, desplazan a los tradicionales negocios barriales.

Que estas nuevas modalidades están produciendo en la ciudad de Viale una distorsión del mercado minorista de alimentos y como novedad también del textil.

Que se hace necesario intervenir en defensa de la competencia, de la libre elección por parte del consumidor y en protección del sano y equilibrado desarrollo de las pequeñas y medianas empresas, con los puestos de trabajo que ellas generan. Sobre todo cuando se encuentran amenazadas por formas de comercialización que tienden a la concentración económica y a la distorsión del mercado; cumpliendo así con los mandatos constitucionales de respeto a los derechos del consumidor, defensa de la competencia y preservación y generación del empleo.

Que, la potestad estatal de regular el mercado cuenta con bases legales suficientemente sólidas que dan sustento a la presente Reglamentación; así por ejemplo con la reforma de 1994, se le dio rango constitucional a la "defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados" (Art. 42 C.N.).

Como los derechos no son absolutos sino que su ejercicio está sujeto a la leyes que los reglamenten dentro de los límites contenidos en el Art. 28 de la C.N., la idea de defender la competencia y de promover un mercado sin distorsiones, remite necesariamente al ejercicio de un poder de policía por parte del Estado que garantice estas premisas constitucionales.

No puede concebirse de otro modo la defensa de la competencia y de un mercado sano, sin una regulación estatal que garantice además el derecho de los usuarios y consumidores a gozar de los beneficios que de ella se derivan.

Queda claro en la reforma constitucional de 1994 la tutela de los usuarios y consumidores a acceder a los beneficios de un mercado en competencia y libre de distorsiones.

Le corresponde al Estado aplicar las herramientas que legítimamente le confiere el texto constitucional, cuidando de no asfixiar con un intervencionismo innecesario la iniciativa privada y la libertad de comerciar y contratar de los particulares; haciéndolo desde una posición equilibrada que no renuncie a su deber de controlar que el despliegue de las fuerzas del mercado no afecten los derechos de los usuarios y consumidores, ni el interés económico general.

Esta facultad constitucional del Estado en materia de regulación se funda también en el inciso 19 del Art. 75 de la Carta Magna, que atribuye al Congreso la tarea de "Proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico con justicia social, a la productividad de la economía nacional, a la generación de empleo...".

Para ello, se amplía la tradicional cláusula del progreso (hoy Art. 75 Inc. 18, C.N.) llevando los nuevos términos a la asignación de atribuciones similares que detentan las provincias (Art. 124 CN) y los municipios (Art. 123), por lo cual de los artículos mencionados se desprende válidamente que la libertad, el derecho en realidad, de comerciar y contratar requiere de la presencia de un mercado sano y transparente, que el Estado debe regular teniendo en miras el interés inmediato de los usuarios y los consumidores, pero también el interés mediato del desarrollo humano y el progreso económico con justicia social, procurando el objetivo de plasmar una economía productiva y alentando la generación de empleo.

La Constitución de la Provincia de Entre Ríos, en su artículo 30 incorporó el reconocimiento de los derechos de los consumidores y usuarios, en los siguientes términos:

“... Se garantiza la defensa de los derechos de consumidores y usuarios de bienes y servicios públicos y privados. Las autoridades provinciales y municipales proveerán a la educación para el consumo responsable, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales y

al de la calidad, regularidad y continuidad de los servicios. Estos derechos son protegidos, controlados y su prestación regulada por un ente provincial o municipal. La norma establecerá los procedimientos para la prevención y solución de conflictos y los marcos regulatorios, previendo la participación de asociaciones de consumidores y usuarios. Existiendo organismos de defensa del consumidor en los municipios, éstos ejercerán las funciones en su jurisdicción. El Estado debe garantizar en los servicios públicos concesionados la fijación de un sistema tarifario justo, razonable y transparente...”; sentando así las bases para una normativa que regule los mismos.

El poder de policía municipal

Conforme el Art. 5º de la Constitución Nacional, la Nación garantiza a las provincias "el goce y ejercicio de sus instituciones" bajo ciertas condiciones, entre las que se cuenta la de asegurar "su régimen municipal". A partir de la reforma constitucional de 1994, el contenido del régimen de los municipios provinciales se vincula con la autonomía municipal por la expresa remisión al Art. 5º que efectúa el Art. 123 de la C.N., remitiendo a la competencia constitucional local "...el alcance y contenido en el orden institucional, político, administrativo, económico y Financiero..." de dicha autonomía.

En consonancia, la Constitución de la Provincia de Entre Ríos en los Arts. 229 y s.s. establece las pautas de organización del municipio local, previendo la asignación de las atribuciones necesarias para una eficaz gestión de los intereses locales.

Esta atribución está concretamente desarrollada en la Ley Orgánica de Municipios de la Provincia de Entre Ríos Nº 10.027 (Arts. 11º y 12º especialmente), refiriendo ella a los aspectos organizativos y delimitando las potestades de los Municipios en cuanto Entes Públicos, y de los órganos/poderes municipales que lo integran (D.E.M. y H.C.D.), etc.; más un esbozo de los contornos del poder de policía municipal; todo ello en base a la AMPLIA AUTONOMIA que el artículo 3º de la L.O.M. les brinda

Art. 3º: "...Todos los Municipios entrerrianos tienen autonomía institucional, política, administrativa, económica y financiera, y ejercen sus funciones con independencia de todo otro poder..."

Que la efectivización del derecho a comerciar constitucionalmente consagrado, es inescindible de su ejercicio conforme a la legislación que se dicte, para evitar su colisión con otros derechos que también gozan de aquella protección. En tal sentido la normativa Nacional prohíbe y sanciona "los actos o conductas, de cualquier forma manifestados, relacionados con la producción e intercambio de bienes o servicios, que tengan por objeto o efecto limitar, restringir, falsear o distorsionar la competencia o el acceso al mercado o que constituyan abuso de una posición dominante en un mercado, de modo que pueda resultar perjuicio para el interés económico general" (Ley 25.156 – Art. 1º).

Que en la citada normativa se establece que una o más personas gozan de posición dominante cuando para un determinado tipo de producto o servicio, es la única oferente o demandante dentro del mercado, o cuando sin ser única no está expuesta a una competencia sustancial, o bien, cuando por el grado de integración vertical u horizontal está en condiciones de determinar la viabilidad económica de un competidor participante en el mercado, en perjuicio de éste.

El poder de policía, entendido como técnica de limitación de los derechos subjetivos, se erige así como una de las herramientas con que cuenta el municipio en la gestión de los intereses locales.

Dentro de tal poder de policía, además de las tradicionales facultades reconocidas al municipio: urbanismo, salubridad, tránsito, moralidad, etc., debe agregarse ahora -en el ámbito geográfico de su competencia- la "**policía de la prosperidad**" que exige medidas de acción positivas para preservar los derechos de los arts. 41, 42, 75 inc. 19 y 124 de la Constitución Nacional.

Desde ya que para que el ejercicio de tales potestades sea reputado legítimo, debe cumplir con la exigencia de **razonabilidad** lógica e indispensable exigida por la Corte Nacional, en orden a no alterar el contenido del derecho que se reglamenta (Art. 28 C.N.).

Deben concurrir a tal efecto, los **siguientes requisitos: 1) fin público; 2) circunstancias justificantes; 3) adecuación del medio elegido al fin propuesto; y 4) ausencia de iniquidad manifiesta (CS, Fallos 199:483 "Inchauspe", 256:241 "BCRA; 217:46 "Aaron abinovich", entre muchos otros).**

La razonabilidad constituye entonces la pauta orientadora del obrar estatal municipal a la hora de reglar aspectos del comercio en la gestión de los intereses locales.

Que la Constitución Provincial habilita a los municipios para promover la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados y el control de los monopolios para garantizar la protección de los derechos de los consumidores. A tales efectos, los faculta a dictar las normas regulatorias que sean necesarias para tales fines art. 30 y 240 inc. 1, 21. a, g, i y 25)

Que a nivel Provincial y Local contamos con antecedentes válidos en la aplicación de normas que ponen en ejercicio la potestad estatal de tutelar los intereses locales.

En lo que respecta a la comercialización mayorista y minorista de alimentos, bebidas y otros productos de primera necesidad, la Ordenanza 999/08 ha sido el primer antecedente de regulación local en la materia.

Con el dictado de la ley 9393 la Provincia de E.R. también estableció un régimen abarcativo de la actividad del sector supermercadista y de bienes de la canasta familiar.

Que no obstante los antecedentes normativos arriba referidos, existe la necesidad de contar con una más amplia regulación **de todo el espectro de comercios** dedicados a la venta de este tipo de bienes y sumarle el **SECTOR TEXTIL**; sin perjuicio de las Ordenanza 999/08 y 1000/08.

Que en tal sentido es necesario promover la lealtad y la diversidad de la competencia comercial, la maximización de la protección al consumidor y las acciones que posibiliten la defensa del empleo local como forma genuina de generación de riqueza y su justo reparto para un mayor bienestar y crecimiento de la comunidad local.

Que el análisis de la actividad comercial ejercida en nuestra Ciudad pone de manifiesto la efectivización, o el peligro cierto, de muchas de las conductas tipificadas como perjudiciales, y ante cuya evidencia es necesario desarrollar políticas de prevención y protección del comercio local, del empleo genuino y la tutela de los derechos de los consumidores, entre otras variables.

Que concretamente se denota la conveniencia y necesidad de abordar la puesta en práctica de un procedimiento aplicable a cada solicitud de habilitación de comercios del rubro textil y de productos de la “canasta familiar”; para lo cual hemos considerado conveniente sumarle a los requisitos y condiciones ya previstos en las Ordenanzas 999/08 y 1000/08 **una limitación espacial** que establezca una “**zona de despeje o reserva**” entre los mismos de acuerdo a su superficie, en la inteligencia de que el mercado local de estos productos se encuentra suficientemente satisfecho y que nuevas habilitaciones se podrán producir en la medida que las mismas acompañen el crecimiento demográfico y geográfico de Viale o respondan a “bajas” de comercios actualmente existentes.

POR ELLO:

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE VIALE SANCIONA CON FUERZA DE:

ORDENANZA

ART. 1º) ALCANCES: Se encuentra sujeta al régimen de la Presente Ordenanza, la habilitación de locales comerciales que ocupen un área mayor a los treinta metros cuadrados (30,00.m2) de superficie y hasta cuatrocientos metros cuadrados (400m2) de

superficie, sea cual fuere la denominación que adopten -autoservicio, mini-mercado, mercado, supermercado, granja, almacén o las que en el futuro las sustituyan; que expendan bienes de primera necesidad pertenecientes a la denominada canasta familiar en los rubros de comercialización a consumidores finales y a minoristas de productos comestibles; bebidas y/o artículos de limpieza en forma simultánea; sin perjuicio de lo dispuesto en las Ordenanza 999/08 y 1.000/08 y demás reglamentaciones pertinentes.-

ART. 2º) RADIO DE PROTECCION:

Se establece un Radio de Protección para los comercios referidos en el artículo 1º de la presente, no pudiendo instalarse nuevos negocios dentro de los parámetros espaciales aquí dispuestos como distancias mínimas de separación entre locales ya habilitados y los que pretendan hacerlo, a saber:

- 1) Establecimientos de más de treinta (30) metros cuadrados, hasta cien (100) metros cuadrados, se establece una distancia mínima de separación entre los mismos de ciento cincuenta metros (150).
- 2) Establecimientos de más de cien (100) metros cuadrados, hasta doscientos (200) metros cuadrados, se establece una distancia mínima de separación entre los mismos de trescientos (300) metros.
- 3) Establecimientos de más de doscientos (200) metros cuadrados, hasta cuatrocientos (400) metros cuadrados, se establece una distancia mínima de separación entre los mismos de quinientos (500) metros.
- 4) Establecimientos de más de cuatrocientos (400) metros cuadrados, se regirán por las disposiciones de la ordenanza 999/08 y demás normas locales y Provinciales que fueren aplicables.

En ningún caso se habilitará un nuevo comercio de una superficie mayor de las aquí indicadas dentro de la misma cuadra en que funcionare otro.

Superficie. Se entiende como superficie del establecimiento la suma de las superficies del salón comercial, la de las dependencias administrativas y sanitarias, la de los depósitos y playas de estacionamiento de clientes, proveedores y personal, no obstante que estén situados en

diferentes inmuebles, contiguos o no, o que pertenezcan a distintos titulares, si la utilización efectiva de los mismos lo sea para los fines del comercio a habilitar.

Las distancias mínimas de separación de cada local alcanzado por la presente Ordenanza se deben calcular desde los límites de la medianera de los comercios habilitados, proyectándose por la acera de la vía pública.-

ART. 3º) Las distancias mínimas dispuestas por el radio de protección establecido en el artículo precedente regirán por el término de 12 meses contados a partir de la puesta en vigencia de la presente norma. En dicho plazo, el Departamento Ejecutivo producirá y analizará información relativa al impacto económico-social de la aplicación de la presente norma; pudiendo complementarlo con estudios de Instituciones académicas, mesas de diálogo y demás medidas a los fines de integrar opiniones de los diferentes sectores involucrados en la temática: representantes de las Cámaras Oficiales de Comercio; de Organizaciones Sindicales del sector; de las Asociaciones de Consumidores; de las ONGs afines; docentes e investigadores especializados en economía regional, entre otros.

Asimismo, en tal lapso y de ser necesario, el Departamento Ejecutivo Municipal requerirá de las herramientas adecuadas a fin de confeccionar un índice territorial de consumo per cápita, con el objeto de garantizar el adecuado abastecimiento a la población y el cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de los derechos del consumidor.-

ART. 4º) REQUISITOS PARA LA HABILITACIÓN: Los comercios descriptos en los artículos precedentes, sin perjuicio de la aplicación de las Ordenanzas 999/08 y 1.000/08, según los casos, deberán iniciar su trámite de habilitación cumplimentando en primera instancia los requisitos dispuestos en la presente norma. La autoridad de aplicación realizará el informe pertinente a los fines de verificar que la solicitud se ajuste a los parámetros aquí establecidos, en caso contrario la solicitud será rechazada *in limine*.-

ART. 5º) Los titulares de los establecimientos comprendidos en el artículo 2º de la presente podrán realizar **AMPLIACIONES** de los mismos dentro los siguientes parámetros:

A razón de un seis por ciento (6.-%) por cada año de funcionamiento ininterrumpido a los locales referidos en el artículo 2º apartado 1) - A razón de un cuatro por ciento (4.-%) por cada año de funcionamiento ininterrumpido a los locales referidos en el artículo 2º apartado 2) y A razón de un dos por ciento (2.-%) por cada año de funcionamiento ininterrumpido a los locales referidos en el artículo 2º apartado 3).-

RUBRO TEXTIL:

ART 6º) DISPONESE que el D. Ejecutivo Municipal únicamente podrá otorgar una nueva habilitación a un local comercial del rubro textil en tanto no exista otro dentro de un radio de **Cien Metros (100mts.)**, contándose tal distancia en la forma dispuesta en el artículo 2º parte final de la presente.

Podrá otorgarse una habilitación cuando se haya producido previamente una baja en el mismo rubro.

Cuando existan solicitudes de habilitaciones comerciales para el rubro previsto en el presente artículo, y se produzcan las bajas referidas ut supra, el D. Ejecutivo deberá priorizar el otorgamiento a aquellos comerciantes que a la fecha no registren habilitaciones en el mismo rubro.

Tratándose de solicitudes de habilitación para locales comerciales destinados al rubro textil los titulares deberán acreditar fehacientemente tres (3) años de residencia ininterrumpida e inmediata anterior en la ciudad de Viale.

El presente artículo no regirá para comercios que vendan productos de elaboración propia en tanto la producción se realice en nuestra localidad. Ni para el caso de aquellos que funcionan en el marco de un CENTRO COMERCIAL a “cielo abierto”.-

NORMAS DE APLICACIÓN A SENDOS RUBROS COMERCIALES

ART. 7º) La presente normativa no rige para los trámites relativos a traslados, reformas, cambios de rubros, fusiones y renovación de habilitaciones de los locales comerciales aquí regulados y que a la fecha estuvieren habilitados y en funcionamiento.

En casos de transferencia del comercio a cónyuge o familiares directos por consanguinidad en primer grado (hijos) del titular, el mismo queda resguardado por el radio de protección.-

ART 8º) No se hará lugar a la habilitación comercial de los rubros aquí legislados en aquellos casos en que el solicitante goce de privilegios unilaterales en materia comercial, fiscal, financiera, laboral o de otro orden, explícitas en convenios o normas legales o derivadas de acuerdos privados, que afecten la leal competencia comercial y constituyan asimetrías a los que no tengan acceso los comerciantes radicados en la ciudad de Viale. En todos los casos, los solicitantes deberán cumplimentar una declaración jurada, expresando la inexistencia de beneficios o privilegios especiales para sus operaciones en el distrito.

ART. 9º) Regístrese, Comuníquese, Publíquese y Oportunamente Archívese.
Sancionada en la sala de Sesiones del H.C.D. de Viale; 28 de Marzo de 2017.-